

El Salvador proceso

informativo semanal

año 9
número 383

mayo 10
1989

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- Economía liberal y Estado policial
- Delegación del FMLN en la ONU
- Endeble propaganda castrense
- Asamblea General del Movimiento Comunal de El Salvador
- Irregulares elecciones en Panamá

Economía liberal y Estado policial

Grandes son las especulaciones que circulan en cuanto a las políticas que irá a adoptar el gobierno de ARENA, sobre todo respecto a la economía y a la conducción de la guerra.

La política económica de ARENA es lo que menos dudas despierta, conocida la vocación liberalizante del partido y la euforia prevaleciente en los sectores del gran empresariado. Las mayorías populares, en general, guardan una actitud de prudente escepticismo respecto de las discusiones económicas, centradas en torno a las posibilidades y conveniencias de una devaluación. Es evidente que una devaluación golpea directa y predominantemente a los sectores populares, quienes ven disminuido su poder adquisitivo y congelados sus salarios, mientras que los sectores del capital oscilan entre los grandes beneficiarios y los que resultan regularmente afectados.

El gobierno electo ha rechazado que vaya a ejecutar semejante medida. Sin embargo, la devaluación, en la práctica, no es un problema de decretos sino la consumación de la puesta en marcha de determinadas políticas económicas. Y en este momento ya se observan algunas tendencias que apuntarían a una devaluación, aunque no inmediata. Entre estas políticas se encuentra la disposición del Banco Central de Reserva autorizando la compra y venta de dólares a particulares, lo que equivale a la legalización de un mercado paralelo. El incremento en los precios de los productos básicos, como leches en polvo, ya alcanza un 50 por ciento y el alza en el valor del transporte parece inevitable. De hecho, podría estarse siguiendo la política del "deslizamiento" que puso en práctica el gobierno del Presidente Duarte y que culminó año y medio después de su ascenso al poder en una devaluación del 100 por ciento.

Lo menos claro en el nuevo gobierno radica en su política de guerra; y esto porque aún no se define al interior de ese partido qué sector está verdaderamente al mando. Es conocida la carta redactada por "la vieja guardia" del partido, instando al Mayor D'Aubuisson a reconducir ARENA por sus originales cauces de ultraderechismo violento e intolerante. El Mayor ha respondido

ultraderechismo violento e intolerante. El Mayor ha respondido con recato y moderación, observando que quienes a eso le instan, más que favor le causan daño; pero aún está por verse qué línea habrá de prevalecer, pues la vieja guardia amenaza con recuperar el partido por propia mano, de no ser atendida su petición.

Paralelamente a esta disputa, van apareciendo signos que sólo apuntan a mayor discordia, división y destrucción del pueblo salvadoreño; y en esto el espionaje y la delación parecen jugar un papel preponderante. De sobra se conoce la decisión del Vice-presidente electo en hacer de su partido una red de inteligencia. El jefe de la Primera Brigada de Infantería, por su parte, ha tomado la iniciativa al juramentar el pasado 6 de mayo el primer contingente de Defensa Civil urbana, integrado más bien por civiles idólatras de la guerra y que de ésta nada saben; aunque con riesgo de que estas estructuras pudieran filtrarse y reforzarse con elementos de escuadrones de la muerte que, en tiempos recientes, han reactivado sus operaciones. Y los peligros de esta modalidad de espionaje a nivel de barrio son aún más evidentes, considerando su extraordinario parecido con prácticas de un Estado policíaco y totalitario, que con visceral apasionamiento rechazan en lo económico los areneros y en lo político los militares.

Lo peor del caso es que, en El Salvador, son conocidos los frutos de estas redes de inteligencia a nivel rural, que escasos dividendos han reportado a la guerra contrainsurgente y muchos sufrimientos a la población. Porque el vecino que se resiste a participar en estas tareas de guerra y espionaje pasa a ser considerado sospechoso y hasta colaborador del enemigo. El pasado mes de diciembre, Andrés Colindres, vecino de Santiago Nonualco, fue instado por efectivos del cuartel de Zacatecoluca a informarles quincenalmente sobre los movimientos insurgentes en el área. Desatendiendo esta orden, la que pusiera en conocimiento de la Iglesia católica, Colindres, su esposa y su hijo fueron dados por desaparecidos durante una incursión de soldados de la mencionada unidad, apareciendo sus cuerpos torturados, dos meses después de haber sido intimidado; caso del que Monseñor Tovar Astorga haría bien en ocuparse, al tiempo de denunciar las minas del FMLN que producen víctimas civiles.

Qué medidas de las apuntadas serán asumidas y potenciadas por el gobierno entrante es todavía una incógnita, aunque todo parece indicar una economía liberal en un Estado policíaco.

Delegación del FMLN en la ONU

VISA: En relación a las críticas locales suscitadas por la concesión de visas para que tres delegados del FMLN viajaran el 02.05 a Nueva York, un vocero de la embajada norteamericana en San Salvador explicó que los delegados rebeldes, residentes en México, presentaron a la embajada norteamericana en dicho país "una carta en la que un funcionario menor de las Naciones Unidas accedía a escuchar sus puntos de vista sobre el posible envío de fuerzas de la ONU a las fronteras centroamericanas, invitadas por los gobiernos, para vigilar el cumplimiento de acuerdos, particularmente sobre el tráfico de armas". "La sede de la ONU en Nueva York —añadía el vocero— goza de extraterritorialidad, por lo que la embajada en México, como es usual en esos casos, concedió a las tres personas una visa de tránsito, por una sola entrada, que les permite ir del aeropuerto a la sede de la ONU y luego regresar al país de residencia. Esta visa de tránsito, denominada "clase C", si fueran a otro país, les permitiría prácticamente sólo cambiar de avión en un aeropuerto o permanecer en territorio de Estados Unidos el tiempo máximo para dicho cambio. Como la ONU está en los propios Estados Unidos, el tránsito es del aeropuerto a las oficinas de la ONU y viceversa, ya que la visa no es ni siquiera de turismo, que es la llamada visa B".

El 2 de mayo recién pasado, una delegación de la Comisión Político-Diplomática (CPD) del FMLN, integrada por la comandante Mercedes del Carmen Letona (Luisa), Salvador Samayoa y Miguel Sáenz, partió de México rumbo a Nueva York para entrevistarse con Alvaro de Soto, asistente ejecutivo del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. El propio De Soto declaró que sostendría una o dos reuniones "preliminares y exploratorias" con la delegación insurgente para tratar del "posible envío de observadores de la ONU a Centroamérica", de acuerdo a la solicitud formulada en febrero pasado por los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Según de Soto, las entrevistas con el FMLN habrían sido concertadas de "mutuo acuerdo".

Los preparativos del viaje corrieron a cargo de Francisco Altschul, representante de la CPD en Washington, pero su materialización sólo fue posible cuando la embajada norteamericana en México, D.F., concedió la visa a la delegación rebelde a solicitud de Francesco Vendrell, jefe de la unidad América y Europa de la ONU, quien envió a la embajada una carta certificando que los delegados del FMLN se entrevistarían con altos funcionarios de la ONU en la sede de esta organización. Según un vocero de la CPD, la delegación desarrollaría "un programa flexible de actividades" durante su estadía en Nueva York, dentro del cual mantendría intercambios con diversas personalidades políticas y académicas norteamericanas. Además de su entrevista con De Soto, los delegados rebeldes se entrevistarían con los representantes permanentes de España, Canadá y Alemania ante la ONU.

Por su parte, la comandante Ana Guadalupe Martínez informó en México que el gobierno norteamericano había concedido las visas sin restricciones de tiempo, merced a lo cual "podría haber espacio para concertar entrevistas con diplomáticos y funcionarios estadounidenses y de la ONU". En particular, la delegación solicitaría a De Soto una mayor participación de la ONU en la búsqueda de una solución político-negociada al conflicto salvadoreño y exhortaría a la Organización a

mantenerse vigilante y presionar para que el nuevo gobierno de ARENA respete los derechos humanos. "Esto significa —añadió Ana Guadalupe— que hay una apertura para escuchar argumentos, para convencerse de cuál es la mejor opción para El Salvador. En ese marco el gobierno de Estados Unidos ha abierto la posibilidad de escuchar argumentos del FMLN en relación a la solución política".

La entrevista con De Soto tuvo lugar el 3 de mayo. Durante ella, la delegación rebelde rechazó la propuesta del envío de observadores de la ONU al área, porque previamente "tiene que haber una solución negociada en El Salvador para que pueda completarse el proceso de paz en Centroamérica", según lo formuló Salvador Samayoa. En opinión de Samayoa, "la democratización, las elecciones libres y el cese de fuego concertado" serían algunos de los requisitos esenciales para resolver el conflicto bélico salvadoreño, planteamiento que sería "compatible con Esquipulas II y, por lo tanto, con lo que Naciones Unidas puede contribuir para implementar su misión de buenos oficios". "Pensamos que para que haya viabilidad del esfuerzo que se está intentando hacer a través de la ONU, debe avanzar el proceso de paz en El Salvador y eso es lo que todavía no ha ocurrido", enfatizó Samayoa.

Malestar de la derecha

El anuncio del viaje de la delegación insurgente causó profundo malestar en amplios sectores de la derecha salvadoreña, no tanto por el viaje mismo, sino por la concesión de las visas de entrada a Estados Unidos. El mismo día en que los miembros de la CPD partieron a Nueva York, el presidente de la Asamblea Legislativa, Lic. Ricardo Alvarenga Valdivieso, manifestó que la decisión norteamericana de concederles las visas "es algo muy peligroso y de gran trascendencia. No es algo sencillo. Tiene mucho trasfondo". "No comprendo cómo es posible que le den visas a terroristas y no al Mayor D'Aubuisson, que está participando en el proceso democrático". En apoyo de tales críticas, Alvarenga señaló que en varias oportunidades "la misma Asamblea ha solicitado el visado para el Mayor D'Aubuisson y la embajada de ese país aquí se lo ha negado". "Es una actitud contradictoria de Estados Unidos —añadió—. Con el gobierno de la República hablan una cosa y por otro lado están permitiendo a la guerrilla, a los asesinos

ATAQUE: Dos cargas explosivas fueron lanzadas a las 7:45 pm del 02.05 contra las bodegas que la embajada norteamericana alquila sobre la calle antigua a San Antonio Abad, causando daños de consideración. Mediante un comunicado de tres puntos, el FMLN desmintió tener alguna responsabilidad en el hecho: 1) "Se trata de una absurda maniobra del Ejército y de ARENA, cuyo objetivo es complicar la visita de una delegación del FMLN a Estados Unidos, tratando de establecer que el atentado fue realizado por los comandos urbanos"; 2) El FMLN "reitera su disposición de no atacar militarmente al personal, instalaciones diplomáticas, ni objetivos económicos norteamericanos en El Salvador"; 3) "Desde que se tomó esta determinación en enero de este año, las unidades del FMLN han acatado plenamente esta disposición".

ATENTADO: En el marco de una sensible escalada represiva contra la Universidad de El Salvador (UES), el vicerrector de dicho centro de estudios, Dr. Herbert Wilfredo Barillas, fue objeto de un atentado el 02.05 en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, del cual escapó ileso. Días antes, el sábado 22.04, su residencia fue objeto de un cateo por parte de elementos de la Fuerza Armada, al igual que la residencia de la Lic. Flor Canales, catedrática de la UES.

ARENA: Durante Asamblea nacional de ARENA realizada el 23.04, fue designado como nuevo presidente del partido el Dr. Armando Calderón Sol, en sustitución del Lic. Alfredo Cristiani. Calderón Sol fue electo por aclamación a propuesta del Mayor D'Aubuisson. Por su parte, el Lic. Alfredo Cristiani y el Sr. Francisco Merino renunciaron a sus cargos dentro del partido para dedicarse de lleno a las tareas que desempeñarán dentro del Poder Ejecutivo a partir del 01.06. Durante el mismo acto, el Mayor D'Aubuisson salió al paso a las críticas contenidas en una carta reciente firmada por "Juan Arena", a través de la cual la "vieja guardia" de ARENA le pide que retome el mando partidario y salde cuentas con los areneros oportunistas que estarían adulterando los principios nacionalistas y anticomunistas originales del partido. D'Aubuisson indicó que quienes escribieron tal carta "no piensan que de hace 10 años para acá mucho ha cambiado" y les reprochó que, con tales apreciaciones, "me están haciendo un mal".

BOMBA: Trabajadores municipales que efectuaban una revisión del techado de la alcaldía capitalina descubrieron el 26.04 una bomba con cuatro cargas de TNT sobre el despacho del alcalde, Dr. Armando Calderón Sol. Técnicos de la Policía Nacional calificaron la carga como de "alto poder destructor".

de la niñez, entrar a Estados Unidos".

Por su parte, en un tono de crítica aún más radical, el presidente del autodenominado Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Edgar Chacón, reiteró su vieja tesis de que "no hay que confiarse de los norteamericanos que son unos hipócritas y traidores"; a lo cual agregó que "ciertos ciudadanos estadounidenses son cómplices de los comunistas a pesar de que han asesinado a sus compatriotas". Según Chacón, "los comunistas norteamericanos, con los comunistas centroamericanos, planean el colapso de la Fuerza Armada. Quieren que el ejército dependa de sus armas para retirarlos la ayuda en determinado momento...Es sólo una demagogia anticomunista, porque el mismo Bush sacrificó a los contras y a los patriotas cubanos de Bahía de Cochinos, como piensa hacerlo con las Fuerzas Armadas salvadoreñas".

A tal extremo llegaron los reclamos de la derecha, que la embajada norteamericana en San Salvador habría considerado conveniente aclarar, según declaraciones recogidas de un vocero suyo por *Diario Latinoú* en su edición del 4 de mayo, que ella no tuvo nada que ver en la concesión de las visas, sino que ésta fue una decisión asumida por la embajada norteamericana en México. El vocero explicó que, en todo caso, las visas que se le concedió a los delegados rebeldes eran válidas solamente para trasladarse a la sede de la ONU, no para movilizarse por todo el territorio norteamericano. En relación al caso del Mayor D'Aubuisson, el vocero aseguró que éste no ha solicitado visa por lo menos desde hace más de un año, por lo cual "es falso que recientemente se le haya negado dicha visa".

Significado del viaje

Más allá del berrinche pueril de Alvarenga Valdivieso y de las acusaciones descabelladas de Edgar Chacón por la concesión de las visas a los delegados del FMLN, el hecho de que el gobierno norteamericano les haya permitido la entrada a su territorio, así fuera solamente bajo el artificio de una visa de tránsito, no deja de tener su importancia, como un reflejo del nuevo nivel de relaciones que el FMLN empieza a alcanzar con el gobierno norteamericano. El hecho de que la propuesta de posposición de las elecciones que el FMLN anunció públicamente a finales de enero pasado haya sido previamente presentada a funcionarios de la administración norteamericana constituiría otro indicio reciente de

ese nuevo nivel de relaciones. Es presumible también que en la concesión de los visados haya influido la decisión del FMLN, anunciada el 1 de febrero pasado, de suspender sus ataques a instalaciones y funcionarios norteamericanos acreditados en El Salvador.

Por lo mismo, resulta contradictorio que, en este marco, el FMLN hubiese ejecutado el atentado dinamitero perpetrado la noche del 2 de mayo contra las bodegas alquiladas por la embajada norteamericana sobre la calle a San Antonio Abad. El 3 de mayo, a través de Radio Venceremos, la Comandancia General guerrillera desmintió que sus comandos urbanos hubiesen sido los responsables del atentado, al tiempo que reafirmó su decisión de suspender sus ataques contra personal o instalaciones norteamericanas en el país. Según el FMLN, el atentado habría sido una "burda maniobra del ejército y de ARENA para confundir a Estados Unidos".

Todo ello parece indicar que el FMLN estaría seriamente interesado en aprovechar el recambio de administración que se ha dado en la Casa Blanca y, en concreto, trabajar por una mayor apertura y flexibilidad de parte de Washington ante una eventual reanudación del proceso de diálogo interno en El Salvador y, de ser posible, por el apoyo mismo de Washington para reiniciar ese proceso.

En su emisión del 3 de mayo, por ejemplo, la voz oficial del FMLN, Radio Venceremos, expresaba que ante la situación de escalada de violencia y polarización que experimenta el país en la coyuntura post-electoral, "el gobierno del Presidente George Bush debe dar muestras de voluntad para resolver por la vía pacífica el conflicto de El Salvador, como lo ha hecho en otros lugares". Según el FMLN, "el primer paso podría ser no continuar con la política del ex-Presidente Ronald Reagan".

Desde luego, las perspectivas de que esto ocurra todavía son remotas. El respaldo que Bush manifestó a Cristiani durante la reciente gira de éste a Washington parece decidido. Con todo, el hecho de que Estados Unidos haya concedido las visas a los delegados rebeldes cuando previamente se la ha negado a D'Aubuisson, si bien no debe sobre-valorarse por encima de lo que significa, puede representar un signo de que el mayor pragmatismo y menor ideologización de Bush respecto de Reagan podrían ir abriendo nuevas posibilidades para el diálogo en El Salvador.

GIRA: El Presidente electo Alfredo Cristiani, acompañado del Vicepresidente electo, Francisco Merino, arribó el 05.05 a Tegucigalpa, donde se entrevistó por espacio de una hora con el Presidente José Azcona Hoyo, a quien solicitó posponer la próxima cumbre de mandatarios centroamericanos hasta julio próximo para darle tiempo a ambientarse en el cargo de Presidente que asumirá el 01.06. Después de la entrevista, Cristiani ofreció una rueda de prensa, durante la cual aseguró que respetaría los acuerdos asumidos por el Presidente Duarte en relación a la pacificación regional. Sobre las relaciones bilaterales con Honduras, prometió que su gobierno acataría el dictamen que emita la Corte Internacional de La Haya sobre el diferendo limítrofe entre ambos países. El 06.05, Cristiani arribó a San José, para invitar, según fuentes oficiales costarricenses, al Presidente Oscar Arias a su toma de posesión presidencial. En el aeropuerto "Juan Santamaría", denunció a la prensa que "Nicaragua ayuda en forma directa a los guerrilleros del FMLN y esto significa una violación de los acuerdos de paz firmados el 7 de agosto de 1984 en Guatemala por los cinco presidentes centroamericanos"; y demandó que "Nicaragua debe cesar su intromisión en El Salvador".

Endeble propaganda castrense

La errada convicción de una posible victoria militar, a corto o mediano plazo, sobre el enemigo, sigue presente y sin mayor alteración en el seno de la Fuerza Armada (FA) y de algunos sectores políticos de derecha. Nueve años de guerra no parecen haber enseñado nada a estas fuerzas que mucho podrían ofrecer en un proceso de paz. Las declaraciones, actitudes y medidas del Alto Mando de la FA y de dirigentes del partido ARENA, que se han verificado tras el triunfo electoral de este instituto político, dan razón a las anteriores afirmaciones.

Los ya señalados preocupantes síntomas que ha venido asumiendo la coyuntura política y militar tras las elecciones presidenciales del 19 de marzo indican que la guerra está desarrollando nuevos tentáculos para asirse con más fuerzas a nuestro debilitado país. Lo más preocupante de tales síntomas es que no sólo apuntan una actitud de enfrentamiento respecto a otras fuerzas sociales y/o políticas, sino una tendencia a generalizar la guerra y extender las modalidades de enfrentamiento, amenazando con alargar aún más el ya prolongado conflicto.

En lo que a la FA corresponde, lejos de disponerse a colaborar en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto, parece estar dispuesta a dar un nuevo impulso a la salida militar. Durante los últimos dos meses, el Alto Mando y COPREFA han lanzado una peligrosa campaña de desinformación y acoso contra personas, instituciones y organizaciones a las que acusan de ser miembros o fachada del FMLN. Además, han mantenido una campaña propagandística dirigida a desprestigiar el accionar guerrillero, deformando y magnificando las operaciones en que resulta afectada la población civil, e insistiendo en una virtual desarticulación de las estructuras político-militares del

FMLN que lo habrían reducido a pequeños grupúsculos de "delincuentes terroristas".

Aparejado a todo esto, con motivo de las celebraciones del día del soldado, el 7 de mayo, la FA dio a conocer la creación de una nueva estructura paramilitar denominada "defensa civil patriótica", y el primer contingente de 72 miembros fue juramentado por el coronel Orlando Zepeda en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería de San Salvador. El hecho es verdaderamente sintomático del estado de la guerra y la misma Iglesia católica ha expresado su preocupación al respecto. Sin embargo, los jefes castrenses han insistido en que ello constituye un paso positivo en beneficio de la población.

De acuerdo a declaraciones de mandos militares, la defensa civil patriótica se constituirá en unidades civiles de autodefensa sobre la base de una organización por barrios y colonias de la ciudad. Ello posibilitaría al ejército una extensa red de seguridad y espionaje con la que, al parecer, pretende dar respuesta al accionar de la guerrilla urbana. La creación de esta versión novedosa de la conocida Defensa Civil es también importante porque con ella se entra en una nueva modalidad de guerra en que el involucramiento directo de la población se constituye en elemento central de la estrategia militar contrainsurgente.

Pese a lo que arguyen los mandos castrenses, tomando en cuenta la larga y nefasta tradición de los cuerpos paramilitares en el país, no es alejado afirmar que una de las consecuencias que acarrearán los nuevos grupos de autodefensa será un incremento de los niveles de polarización que ya vive el país. Los innumerables delitos y crímenes de que han sido acusados elementos de la defensa civil hacen pensar también que con las nuevas estructuras

paramilitares la violencia urbana podría agudizarse, convirtiéndose así, antes que en un órgano auxiliar de la FA, en un elemento más de descomposición social.

En este mismo orden de signos que señalan una tendencia hacia la extensión de los niveles y modalidades de enfrentamiento, tras su triunfo electoral, el partido ARENA ha mantenido su propia, tendenciosa e irresponsable campaña propagandística contra personas y organismos que considera adversarios políticos y a los que vincula directamente en el FMLN. En el mismo sentido, sus más altos dirigentes han hecho explícita su decisión de organizar desde sus estructuras partidarias una red de información e inteligencia paralela a la red de inteligencia militar del ejército.

En fin, los dos meses previos a la toma de posesión del nuevo gobierno parecen estar sirviendo de preparación a los futuros esfuerzos militares por derrotar al FMLN. Los síntomas que se han venido experimentando indican con bastante claridad que tanto la dirigencia de ARENA como el Alto Mando de la FA están dedicando el grueso de su creatividad a la guerra y no a la búsqueda de la paz.

Por su parte, el FMLN, tras los comicios presidenciales, ha mantenido un ininterrumpido accionar y ha advertido que intensificará sus operaciones en mayo, con vistas a boicotear el traspaso de mando a la nueva administración. Durante este tiempo, la operatividad guerrillera ha estado centrada en pequeños y medianos ataques y emboscadas a tropas del ejército, y en la ejecución de regulares maniobras militares regionales contra posiciones fijas o semifijas de la FA. La modalidad táctica objetable al FMLN en este período es la masificación del uso de minas en algunas áreas, como medida de contención a los planes militares de contrainsurgencia. Tal medida, aun cuando no

en las dimensiones que lo han propalado los voceros de la FA, ha tenido consecuencias negativas sobre la población civil, en casos donde no se ha hecho uso correcto de los normativos de prevención establecidos por la Comandancia General del FMLN.

En general, el accionar rebelde experimentado parece desvirtuar las interpretaciones castrenses respecto a la debilidad militar del FMLN. La semana recién pasada se registraron acciones en Huizucar, en la Libertad, donde la FA aseguró murieron 4 rebeldes, entre ellos 2 de nacionalidad mexicana; en Jucuarán, Usulután, donde se atacó la casa cuartel de la defensa civil; en los alrededores de Chalatenango y poblaciones de San Miguel y en San Salvador. Además, al menos 3 vehículos particulares y comerciales fueron incendiados, y el sabotaje al tendido nacional de energía eléctrica mantuvo en un 10 por ciento el déficit del servicio.

La acción más importante fue la registrada el 7 de mayo en el área de Las Vueltas, en Chalatenango. De acuerdo a reportes oficiales, los combates se prolongaron por más de 24 horas y en ellos participaron fuerzas terrestres y aéreas. Acciones como éstas parecen desbaratar el argumento castrense según el cual el debilitamiento del FMLN le ha hecho pasar de la guerra de guerrillas a una "guerra terrorista contra la población civil". Tales combates poseen más bien características de una guerra regular de defensa de posiciones, que acciones de carácter guerrillero. Que un "reducto de delincuentes terroristas" logre entablar combates de tal magnitud contra tropas de un ejército supuestamente profesional y con una gigantesca superioridad numérica y logística, no parece responder a la más rudimentaria lógica y mucho menos a la realidad.

Asamblea general del movimiento comunal de El Salvador

A menos de tres semanas de la toma de posesión del nuevo gobierno, y en momentos en que el país atraviesa un preocupante período de exacerbación de la violencia, tanto de la guerra como en la violación a los derechos humanos, las comunidades marginales organizadas en directivas comunales, organismos amplios que las aglutinan por sector, y un organismo unitario al que todos los organismos amplios pertenecen, llamado por ahora Movimiento Comunal Salvadoreño (MCS), se reunieron en Asamblea General el 7 de mayo recién pasado, para discutir su problemática y formular en una plataforma común sus demandas más urgentes.

Que esto se haga en un contexto como el salvadoreño, en donde el 60 por ciento de la población vive en extrema pobreza, el 70 por ciento de las viviendas —según datos de 1982— no cuentan con instalaciones de servicio de agua potable, el 78 por ciento no tiene servicios sanitarios, el 50.5 por ciento no cuenta con habitaciones separadas para dormir, y el 34.2 por ciento carece de servicio de energía eléctrica, representa el surgimiento y desarrollo de un movimiento popular organizado de gran potencia cuantitativa y cualitativa, realmente representativo de un amplísimo sector de la población salvadoreña.

Frente a tal situación de pobreza, configurada por las estructuras económicas y sociales prevalecientes en el país, y ahora exacerbada por la crisis y la guerra, resulta tanto más lamentable y alarmante el hecho de que las asignaciones presupuestarias correspondientes en 1988 al ramo de defensa y seguridad pública representen un 35.6 por ciento del Presupuesto nacional, mientras que salud pública y asistencia social apenas alcanza un 10.4 por ciento y

educación un 19 por ciento. Así es como el gobierno salvadoreño pretende servir a una población que, según datos de UNICEF para 1989, el 56 por ciento es menor de 15 años, tiene una mortalidad infantil de 54 por mil, un índice de mortalidad materna del 7 por ciento; la desnutrición alcanza al 55 por ciento de los niños, al tiempo que el 34 por ciento de los niños en edad escolar no asisten a la escuela.

Necesidad de organización en zonas marginales

Tales condiciones estructurales han sido configuradoras de un movimiento popular iniciado con directivas comunales 20 años atrás, al principio muy influenciadas por la organización de comités de partidos políticos en época de campaña y en algunos casos sostenidas como organización para enfrentar en colectivo la solución de sus más urgentes necesidades. Con la crisis y las destrucciones de la guerra que ya para 1985, según AID, alcanzaban 1,500 millones de dólares, en la última década las organizaciones comunales han experimentado un sensible crecimiento desde 1983-84 al presente, sobre todo a partir de la urgentísima necesidad de vivienda a que el terremoto de octubre de 1986 les implicó.

De 1986 al presente se ha desarrollado ya un movimiento comunal importante en el área metropolitana de San Salvador. Según la dirigencia del MCS, este organismo aglutina hoy a 116 comunidades en las que habitan unas 60 mil familias, aglutinadas en los llamados "organismos amplios" que lo conforman, a saber, el Consejo de Comunidades Marginales (CCM), que a su vez coordina al Comité Juvenil de Comunidades

(CJC) y a la Asociación de Mujeres Marginales (AMMA); el Comité de Mejoramiento y Promoción Comunal (CMPC); la Coordinadora General de Asociaciones Comunales San Bartolo, Ilopango (COOGACBI); y el Consejo de Comunidades Damnificadas San Roque (CCDSR). Todos ellos estaban unificados antes en la Unidad de Comunidades de El Salvador (UCES), convertido ahora en el MCS.

En la polarizada dinámica del proceso salvadoreño, pocos sectores sociales tienen tanto peso y encuentran tan abundante racionalidad y justeza de su organización y gestión reivindicativa, como los sectores marginales. Tanto ha sido su crecimiento en la última década que ya no es suficiente el nombre tradicional de "marginales", sino que el sistema socioeconómico prevaleciente en El Salvador ha tenido que empezar a hacer distinciones del "tipo" de marginalidad al interior de ese sector según ha sido la causa de su arribo a los cada vez más grandes asentamientos urbanos de este tipo. Son ahora "marginales" las comunidades más antiguas ubicadas en asentamientos en las márgenes de quebradas, así como en terrenos muy irregulares y por ello inútiles para cualquier uso; son **colonias ilegales** los asentamientos pequeños y medianos de población en terrenos de propiedad municipal o privada, que han sido ocupados por pobladores que, por razones urbanísticas o de peligro por el terreno o el clima han tenido que salir de sus asentamientos "marginales" originales, mesones u otros, e instalarse en un terreno físicamente menos inseguro. Son **desplazados** aquellos núcleos de población procedentes del interior del país que han tenido que trasladarse a las ciudades por carencia de tierras, posibilidades de producción o por el conflicto bélico en la mayor parte de los casos. Son **damnificadas** aquellas comunidades procedentes de zonas marginales, de mesones, o pequeñas

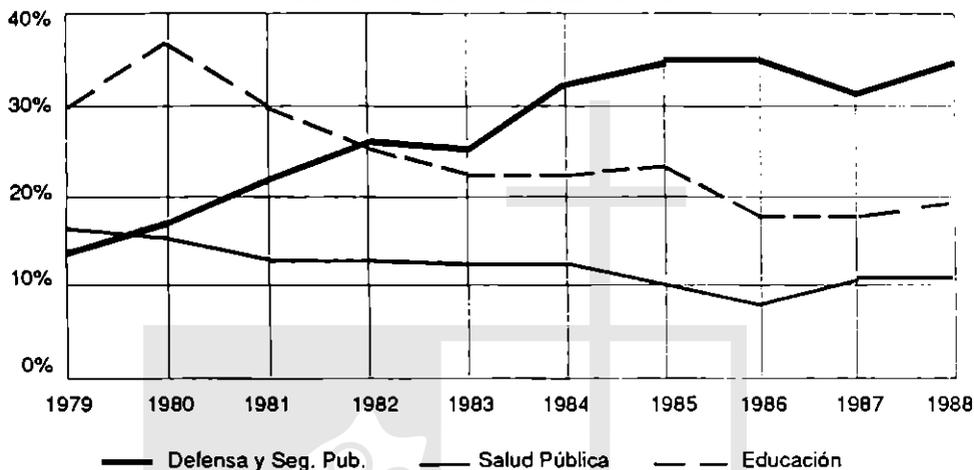
viviendas cuyos terrenos y techos fueron destruidos por terremotos (principalmente el del 10 de octubre de 1986) y, a causa de ello, han debido construir sus asentamientos en otros lugares, algunos terrenos marginales, otros terrenos regulares de propiedad municipal o privada. Y, finalmente, son **colonias urbanizadas** de escasos recursos aquellas series de viviendas que han sido construidas por instituciones de asistencia social para sectores populares —en buena medida con el trabajo cooperativo de la comunidad—, viviendas mínimas que cuentan con instalaciones de servicios básicos de agua potable y energía eléctrica.

La Asamblea General y sus demandas

Tan deplorable y alarmante situación de un grupo poblacional tan populoso apunta a una realidad realmente deshumanizante en donde la mayoría de la población no tiene vivienda digna, no cuenta con los servicios básicos y carece de las mínimas condiciones sanitarias para reproducir la propia vida; así como señala también la existencia de una administración estatal para la cual la prioridad en la conducción del país está puesta en el sostenimiento de la guerra, mientras las asignaciones presupuestarias a educación y salud pública vienen experimentando desde 1979 un sensible descenso en favor de un incremento notable de la asignación a defensa y seguridad pública (Véase gráfico).

Sobre el trasfondo de estas condiciones estructurales, durante la Asamblea del MCS se discutió fundamentalmente la consistencia de las demandas más urgentes de las comunidades populares, y su formulación en una plataforma reivindicativa común que recoja las necesidades más urgentes de los "sectores" que la componen, a saber, marginales, colonias ilegales, desplazados, damnificados y colonias urbanizadas de

EL SALVADOR ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL



Fuente: Ley General de Presupuesto
Gráfico: CIDAI

familias de escasos recursos.

Durante el desarrollo del evento, los delegados comunales expusieron y discutieron en las diversas mesas de trabajo sus más urgentes necesidades, y lograron una plataforma común que "presentamos, para su cumplimiento a: gobiernos municipales, instituciones del Estado, asamblea legislativa y al presidente electo Lic. Alfredo Cristiani de ARENA", según el documento presentado en el evento. Las principales exigencias de tal plataforma son las siguientes: 1) "...a los gobiernos municipales, la expropiación de los terrenos privados (incluyendo los mesones) donde están ubicadas nuestras comunidades a un precio simbólico de 3.00 colones por vara; 2) ...al gobierno central y a los municipales, la legalización y donación de los terrenos estatales donde están ubicadas nuestras comunidades y evitar desalojos; 3) ...al vice-ministro de vivienda, la creación de un programa de viviendas

populares con todos los servicios básicos para nuestras comunidades para que estas viviendas sean dignas, seguras y definitivas y que esto sea en coordinación con los organismos comunales; 4) ...al Ministerio de Educación, la construcción y equipamiento de escuelas e institutos para nuestras comunidades y colonias en coordinación con los organismos comunales; 5) ...al Ministerio de Salud Pública, la construcción y equipamiento de clínicas y unidades de salud en nuestras comunidades y colonias en coordinación con los organismos comunales; 6) ...al Ministerio de Trabajo y Previsión social, abrir y crear nuevas fuentes de trabajo con salario de acuerdo al momento actual y que permita proporcionar empleo para los pobladores de nuestras comunidades y frenar en alguna medida el índice de desempleo y subempleo que hoy por hoy es del 70 por ciento...; 7) ...a los gobiernos municipales, que proporcionen el financia-

miento a nuestros organismos comunales, para proyectos de obra física para nuestras comunidades; 8) ...a los gobiernos municipales, la aprobación de las solicitudes de personería jurídica que presentan nuestras comunidades y organismos; 9) ...al Ministerio de Economía, la rebaja del 60 por ciento de los productos de la canasta básica, así como... un real y efectivo control de precios...; 10) ...al gobierno y al Alto Mando de la Fuerza Armada, el respeto físico y moral a los habitantes de nuestras comunidades, así como también un alto a la violencia de los derechos humanos y la erradicación de los escuadrones de la muerte, ...(también) un alto al reclutamiento forzoso en nuestras comunidades"; y otras demandas de limpieza de la ciudad y alumbrado público. La plataforma concluye señalando que "creemos que deben solucionarse todas estas peticiones y se deben de potenciar los mecanismos para solucionar la guerra, ya que afectados por la misma y sus consecuencias, esta debe de terminar. Por lo tanto exigimos que se reinicien los diálogos para encontrar la paz justa y duradera a través de una solución política negociada al conflicto".

Tales necesidades formuladas justamente por un sector significativo de la población, normalmente silencioso —o quizá silenciado— en el debate público, constituyen a esta altura de la coyuntura un punto de orientación importante para la dirección de la próxima gestión gubernamental, por cuanto señalan claramente el punto esencial hacia el cual debe orientarse toda política estatal que, en verdad, quiera ser efectiva y legítima para la subsistencia y el desarrollo de los salvadoreños.

Sin embargo, quienes dirigen estos organismos que buscan la autogestión comunal parecen no tener mayores expectativas puestas en el futuro gobierno, esto en primer

lugar porque, según sus palabras, "el gobierno de ARENA es ilegítimo porque la mayoría no fue a votar... La fuerza principal no es ARENA, sino la gente que no fue a votar: esa fuerza es la gente que dijo no a ARENA, al PDC y al proyecto contrainsurgente". A ello añaden, de cara a la próxima gestión arenera, oscuros pronósticos en cuanto a violaciones a los derechos humanos y posibilidades de ayuda gubernamental al mejoramiento económico de los sectores populares, por cuanto "estamos claros que ARENA representa a éstos, a los ricos... pero el aumento de la represión no va a hallar al movimiento popular con las manos atadas".

Vistas las demandas, es evidente que la mayor parte de ellas expresan urgentes necesidades de un amplio sector de la población que, lo que en el fondo ha exigido desde años atrás y está exigiendo al futuro gobierno, es nada más que el ejercicio constitucional de su gestión, esto es, el cumplimiento de los dos primeros artículos de la Constitución Política de la República, que establece en el "Art. 1...es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social... Art. 2 Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos".

Basta entonces asomarse a la alarmante precariedad de las condiciones de vida de los sectores populares, que las cifras por un lado, y las demandas de las comunidades por otro, describen, para determinar cuán constitucionales son los gobiernos que en este país alternan en el poder; y cuán necesario es entonces que sea el propio pueblo con sus urgencias y sus capacidades como mayoría, quien vaya procurándose progresivamente su propia autogestión.

Irregulares elecciones en Panamá

Panamá atraviesa su más profunda y prolongada crisis política —que cumple ya su segundo año—, agudizada y producida en buena medida por el claro papel injerencista jugado por el gobierno norteamericano en ella. El 7 de mayo, dentro del forcejeo entre las fuerzas del gobierno y las opositoras por inclinar a su favor la dinámica de la crisis, se celebraron elecciones generales para nombrar nuevos representantes de corregimientos, diputados, dos Vicepresidentes y un Presidente. Los observadores de los sucesos políticos internos de Panamá consideraban que la realización de los comicios terminaría siendo crucial para dar paso a una eventual normalización de la situación o, por el contrario, para alcanzar mayores niveles de deterioro de la confrontación política.

Los comicios estuvieron anteceditos por una campaña electoral, transcurrida a lo largo de los últimos tres meses, en la cual se enfrentaron dos grandes coaliciones políticas. Por un lado, la coalición del gobierno, compuesta por ocho partidos políticos, denominada Coalición de Liberación Nacional (COLINA), cuyo candidato a la presidencia, Carlos Duque, ha sido un hombre de confianza del General Manuel Antonio Noriega. Por otro, la coalición de la oposición, compuesta por tres partidos y denominada Alianza Democrática de Oposición Civilista (ADOC), con Guillermo Endara como candidato. Los temas de la campaña se polarizaron exclusivamente en torno a los ejes naturales de la confrontación política: la presencia y el papel de las fuerzas militares estadounidenses acantonadas en Panamá, ventilada por el gobierno, y, por parte de la oposición, la permanencia del Gral. Noriega al frente de las Fuerzas de Defensa del país.

Otra característica sobresaliente del

período pre-electoral fue el aumento del deterioro de las ya maltrechas y tensas relaciones entre Washington y Panamá, las cuales empeoraron progresivamente a medida que se acercaba el día de los comicios. Muestra de ello la constituyeron las declaraciones del 2 de mayo del presidente George Bush, denunciando la presunta organización de un fraude electoral masivo de parte del gobierno panameño. Bush pidió a "las democracias" de Europa y América Latina una condena explícita a esos supuestos intentos de fraude y advirtió enérgicamente al gobierno de Panamá que "Estados Unidos no reconocerá los resultados de una elección fraudulenta, diseñada para mantener a Noriega en el poder." Paralelamente, el Departamento de Estado norteamericano denunciaba que en Panamá se habría intensificado "espectacularmente la campaña de hostigamiento e intimidación" contra los partidos de oposición, periodistas y extranjeros, de parte del gobierno de Noriega.

En ese clima de tensión e inseguridad interna y de confrontación con los Estados Unidos, se llegó al día de las elecciones. El gobierno panameño ordenó a todos los medios de comunicación que se abstuvieran de transmitir información relacionada con el desenvolvimiento del proceso electoral, función que quedó bajo el exclusivo control del centro de prensa oficial. Asimismo, el 6 de mayo, un día antes de las votaciones, el Ministro encargado de la Presidencia, Manuel Solís Palma, pronunció un mensaje a la nación en el cual aseguró que la permanente amenaza de una intervención militar de gran envergadura por parte de Estados Unidos constituía el principal peligro de la coyuntura política que vivía el país. Según Solís Palma, "la desinformación montada por el

Departamento de Estado está destinada a preparar a la opinión pública mundial para que ésta acepte una posible intervención directa en contra de la integridad territorial de Panamá."

La población panameña acudió a las urnas en forma masiva, pacífica y ordenada, aunque el clima de tensión que predominaba en el país se hacía notar. Cerca de cuatrocientos observadores internacionales de por lo menos treinta países, entre los cuales destacaron los expresidentes de Estados Unidos, Jimmy Carter y Gerald Ford, así como numerosos diputados europeos y latinoamericanos, presenciaron el desarrollo de los comicios. Las graves irregularidades experimentadas por el proceso, constatadas y denunciadas por los observadores internacionales y por la oposición, se produjeron al cierre de las votaciones. En la noche del escrutinio, se sucedieron numerosos incidentes protagonizados por grupos militares y paramilitares, quienes asaltaron los colegios electorales, robando y quemando las urnas que contenían los resultados legítimos de los sufragios. Las denuncias de fraude a favor del gobierno adquirieron incuestionable credibilidad cuando el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, Diomedes Rosas, anunció que, quince horas después de terminada la votación, no habían recibido ninguna acta electoral. Ante este hecho, los observadores del Parlamento Europeo se declararon "perplejos y escandalizados." Por su parte, el ex-presidente norteamericano Jimmy Carter acusó a la "dictadura militar panameña" de "falsificar" los resultados de la elección, en los que, según dijo, la oposición venció "por tres a uno."

Aunque dos días después de la votación aún no se tenían resultados oficiales preliminares, tanto la coalición pro-

gubernamental como la opositora se declararon triunfantes en los comicios. Esto llevó a la oposición a escenificar protestas callejeras que rápidamente degeneraron en disturbios violentos con un saldo de varios golpeados y heridos.

La situación en que se encuentra Panamá es delicada y álgida. Algunos congresistas estadounidenses opinan que el presidente Bush debería considerar el empleo de la fuerza para defenestrar finalmente al General Noriega. Otros, incluso, consideran pertinente derogar los tratados del canal. La posición de administración norteamericana, insólitamente, evidencia una relativa prudencia que habría sido impensable en la pasada administración. En efecto, desde los días previos a la elección, la Casa Blanca manifestó que había examinado ya todas las opciones a llevar a cabo, en caso de que el presunto fraude se consumara. En esa oportunidad, altos funcionarios gubernamentales filtraron al **Washington Post** que "la opción militar no es una opción seria, ya que ha contado con la oposición de muchos de los aliados y consejeros consultados." De todas formas, es realmente preocupante que Washington ceda a la tentación de impulsar medidas unilaterales que podrían complicar aún más la compleja situación panameña. Panamá es, ciertamente, un reto decisivo para el presidente Bush, ya que es su primer desafío internacional. Manejarlo con habilidad y astucia es algo a lo que no puede renunciar. En este sentido, incluso los más radicales líderes de la oposición panameña han señalado claramente que no solicitarán a Estados Unidos un bloqueo económico más severo que el actualmente impuesto y que tampoco hay nada que justifique una intervención militar contra su país.

PRESENTACION

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

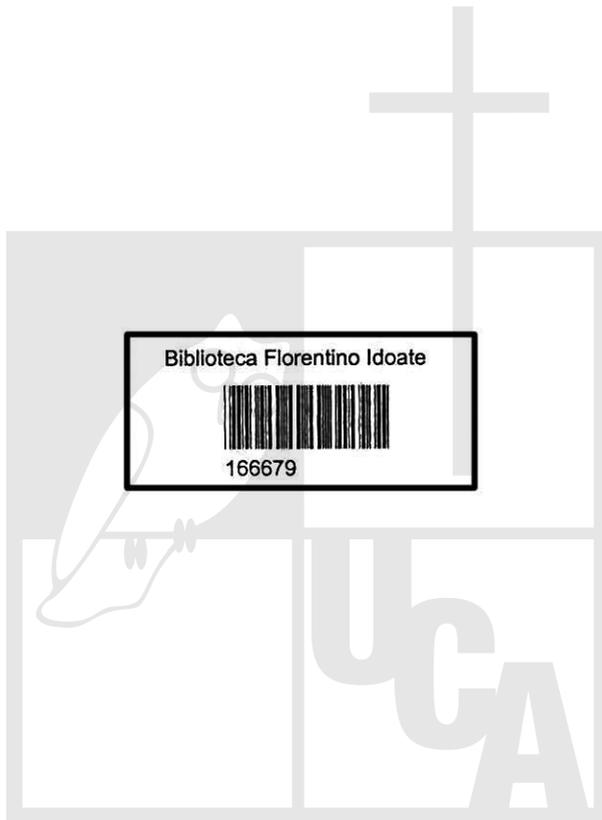
Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador	
personal	¢ 50.00
correo	¢ 60.00
Centroamérica y Panamá	\$ 25.00
Norte y Sur América	\$ 35.00
Europa	\$ 40.00
Otras regiones	\$ 45.00

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 236375 y 240011 Ext. 161 y 191.



Biblioteca Florentino Idoate



166679